LOS DESACUERDOS

ENTRE O'HIGGINS Y EL SENADO CONSERVADOR

(Conclusion)

Como hemos dicho, estos esfuerzos de los poderes públicos para crear recursos al Erario nacional, poderosamente secundados por el patriotismo de los particulares, vieronse coronados por el éxito. El ejército que se organizó mediante ellos hízose, en fin, a la veia con rumbo al Perú, llevando consigo las esperanzas de dos pueblos hermanos, y en la punta de sus bayonetas, la libertad de un tercero.

No bien se había obtenido este halagador resultado, cuando el Senado creyó que debía aliviar al país de las pesadas cargas que venia soportando. Sin pensar en que la obra en que se había empeñado encontrábase apenas iniciada, pues no cabía suponer que luego de desembarcado aquel ejército viniese el virrey español a rendirle su espada, procedió a suspender el cobro de las contribuciones que estimaba más odiosas. Así, no se continuó percibiendo la mensualidad fijada a los vecinos, ni se descontó a los empleados públicos el tercio de sus sueldos. Ni, en fin, se hicieron efectivas otras gabelas análogas. Realmente, consideraban los senadores que iba a comenzar una nueva era. El jinete de la guerra alejaba de Chile para sembrar de deso-

TOMO LXXII
lación otros países, arruinar industrias y fortunas extrañas. Parecía natural que empezasen a saborear los chilenos los frutos de una paz conquistada después de sacrificios sin cuento.

Esta conducta no pudo sino contrariar profundamente a O'Higgins que, como militar de experiencia, entreveía el largo camino que quedaba aún por recorrer, para dejar asentada la independencia del Perú y aniquilar los restos del ejército enemigo que merodeaba en la provincia de Concepción. Apruróse a incitar al Senado para que, volviendo sobre sus pasos, adopiese los arbitrios conducentes a mejorar el estado de las finanzas nacionales, que tendía nuevamente a hacerse crítico.

Es reveladora una carta que escribe a San Martín, empeñado entonces en lo más rudo de su campaña:

«No puede usted figurarse, le dice, lo que me da que hacer nuestro buen Senado. Ellos me han quitado todos los medios de auxiliar ese ejército, cerrando las puertas a un sin número de arbitrios que les he presentado, íntimamente con la baja de los derechos de las harinas, del ramo de licores, del derecho de carbon, agregándose la cesación de la contribución mensual en todo el Estado, me han puesto al borde del precipicio. 

O me veo en la preciosa de disolver este cuerpo mauloso o pierdo la provincia de Concepción por falta de recursos. Hago a usted esta reflexión sobre el Senado para que sirva a usted de experiencia: que cuando hombres selectos y amigos presentan tan desagradable aspecto ¿qué harán los que son indiferentes o elejidos por la multitud desenfrenada?»

La franqueza con que en el secreto de la amistad hablaba O'Higgins, hace inútil todo comentario. Por aquella época, esto es, a mediados de 1821, se sensibía sin fuerzas para continuar la campaña en que venía empeñado con el Senado. Aspiraba a retenir la integridad del poder que parecía irse de sus manos, porque para gobernantes educados en la escuela del autoritarismo, como eran generalmente los de esa época, no es sino sombra de poder aquel que se comparte con otras autoridades y se ejercita dentro de ciertos límites.

El Senado había sido ciertamente víctima de un error, al creer que las dificultades de la situación estaban salvadas; pero debemos decir en su abono que apenas fué impuesto por
O'Higgins de que ellas iban en aumento, hizo todo lo posible por repararlo. Acordó celebrar sesiones diarias hasta dejar revelados los gastos con las entradas, y citar a una de estas sesiones a los ministros de Estado.

Esta invitación fue aceptada, pero desgraciadamente la reunión de senadores y de ministros no produjo ningún resultado. Después de un largo y estéril debate, en que se insinuaron diversas medidas, resolvieron aquéllos diferir por algunos días el tratamiento del grave mal que aquejaba al erario, mal que revelaba todos los caracteres de una dolencia incurable. Lo único que se dejó establecido era que no cabía pensar en una rebaja de los exigas sueldos de los empleados, arbitrario aconsejado por algunos senadores que creían en la posibilidad de introducir economías en los gastos públicos por dicho medio.

Dos corrientes parecen haberse dibujado en aquella reunión. La de los ministros, que pretendían gravar con nuevas contribuciones distintos ramos de la riqueza privada, y la de los senadores, que aspiraban a obtener el resultado apetecido disminuyendo los egresos. Unos y otros eran lógicos con su respectiva situación, pues en casos semejantes, los hombres públicos, más que por un estudio exacto y desapasionado de los elementos que componen el problema económico, obran movidos por sentimientos de un carácter puramente accidental, y así se nota que los congresos pretenden vencer las dificultades financieras pidiendo órden en la administración, disminución de los sueldos de los empleados públicos, etc., mientras que los jefes de esa administración, y responsables de su buena marcha, no encuentran otro medio de salvación que el de apelar a los impuestos.

No se produjo, por el momento, en nuestro caso, la armonía de estos dos sistemas, y de ahí que la sesión terminara sin habérse llegado a otro acuerdo que al que queda indicado y que, en cierto modo, importaba una victoria de la política económica defendida por los ministros.

Esta política prevaleció al fin. Poco a poco, los senadores fueron entrando por el camino de los impuestos hasta llegar a autorizar una contribución directa e extraordinaria, por una sola vez, de cuarenta mil pesos, a condición de que no se gravase con ella a personas de escasa fortuna.
Costó, sin embargo, trabajo al Ministro, arrancar esta autorización, y solo fue dada, después que el Senado hubo hecho una enumeración de todos los arbitrios que había otorgado anteriormente y que a su juicio bastaban y sobraban para salvar al erario de las angustias por que atravesaba. Entre esos arbitrios figuraban un derecho de quince por ciento establecido sobre los frutos del país que se exportasen al Perú, en el término de cuatro meses; un aumento de dos pesos por arroba en el derecho sobre la yerba mate y el azúcar; un aumento de un cuarenta por ciento sobre el tabaco en polvo, con la prevención de que no debían admitirse en pago billetes, sino «dinero sonante». Había dictado, por último las providencias necesarias para hacer efectivo el cobro de las contribuciones o erogaciones que se quedaban debiendo. Solo para evitar mayores males y aun burlando las repetidas promesas hechas al pueblo, consintió, pues, en autorizar la contribución extraordinaria mencionada.

La nota del Senado, que revelaba a las claras su intención de detenerse en este camino, dio origen a un serio conflicto.

En vista de los términos en que estaba concebido, apresuróse O'Higgins a protestar del espíritu que guiaba a esta corporación, y a manifestarle que el hecho de que los chilenos estuviesen entonces menos gravados que durante la colonia, con ser que tenían mayor ejército y mejor administración, provenían los apuros del erario; no de que esta administración fuera descuidada o despilfarra. No comprendía el Director Supremo que en las difíciles circunstancias por que atravesaba el ejército del sur, que carecía de toda clase de recursos, en presencia de las fuerzas bien provistas y municionadas de Benavides, con grave peligro de la integridad y aun de la independencia nacional, el Senado tuviese escrúpulos para imponer las contribuciones que fuesen necesarias y llegase hasta rebajar el derecho sobre los azúcares, pues no a otra cosa equivalía el gravarlos en la nueva forma acordada.

«Yo, decía estrujando esta resistencia para aceptar en un todo sus medidas económicas, yo, que respondo a Dios y al mando entero de un millón de hombres virtuosos que han querido consignarse a mi dirección, no puedo librarme al recor,
irreligion y barbarie de semejantes agresores (los soldados de Benavides) por consultar el liberalismo civil i comercial.

Explicaba en seguida cómo en la época colonial el erario tenía mayores recursos para enunciar en seguida muy brevemente el peligro de una bauarrotada cercana y terminar declarando que no podía ni debía aceptar la disminución de ninguna entrada fiscal, pues la salud del estado exigía imperiosamente los auxilios que había pedido por intermedio de su ministro y que eran indispensables para sostener el ejército del sur.

En las últimas palabras de esta nota hacía la promesa de que una vez libre el país de enemigos interiores y exteriores, se apresuraría a aliviar a los particulares de las pesadas cargas que soportaban, y pedía que el Senado nombrase un representante de toda su confianza para que, acercándose al Ministro de Hacienda, combinase con éste los medios de mejorar la situación.

Mas terminante aun que la anterior fué otra nota dirigida por el mismo O'Higgins al Senado, pocos días después, para comunicarle que los recursos estaban completamente agotados, que nadie prestaba dinero sino al 18 por ciento mensual y que todo retardo traería la ruina del Estado. «Yo repito a V. S., terminaba cuanto dije en mi anterior, y protesto por lo más sagrado que el mas leve retardo no es a mi cargo ni puedo silenciarlo al público.»

Así, todas las medidas adoptadas, que el Senado había creído salvadoras de la situación, nada habían salvado. El gobierno se sentía más impotente que nunca para hacer frente a las dificultades que surjan de todas partes, y el país se hallaba al borde de su ruina. Lo peor era que O'Higgins echaba sobre los hombros del Senado el peso de tan tremenda responsabilidad, pues a las exigencias dolorosas, pero imprescindibles, que tenía la salud pública, anteponía las consideraciones platónicas de un «liberalismo civil i comercial.»

El Senado no podía aceptar semejante imputación, mucho menos cuando se hacía en tono de amenaza.

Precisamente O'Higgins le dirigió estas comunicaciones pocos días después de haber escrito a San Martín la carta que se ha citado i que revelaba de un modo elocuente la profunda contrariidad que lo dominaba. Sin duda que en el espíritu del...
Director Supremo se asitia ya la idea de concluir con la mau-
lesa corporación, tan rebelde a sus miras, que él mismo había
elegido; pero esta idea luchaba con escrupulos constitucionales
que aún no habían perdido todo su imperio.

No se sintió intimidado el Senado por esta actitud, de día en
día más hostil. Contestó esponiendo largamente todos los es-
fuerzos que había hecho para prover de recursos al erario, ma-
ñifestó que las medidas adoptadas habían sido convenidas con
el Ministro Rodríguez, incluso la del nuevo derecho sobre los
azúcares, promulgada oportunamente en la “Gaceta Ministe-
rial”, y detúvose en probar que dada la forma en que se había
acordado este derecho su monto era más sujeto, y en conse-
cuencia, no existía la disminución de que hablaba O’Higgins.
“No hai arbitrio que no se haya adoptado, decía, recapitulando
la exposición y defensa de sus procedimientos a excepción del
papel-monedas directo, porque esto acabaría de perderlos.”

En seguida, después de refutar con abundantes hechos la
aseveración de que en la época de la colonia los contribuyentes
hubieran estado menos gravados, sostenía que el Senado no
había estado menos dispuesto a conceder recursos que O’Hig-
gins a pedirlos.

I aquí aparece la personalidad de Rodríguez Aíldea, Ministro
ahora de gobierno que había cobiado gran ascendente en el
ánimo de O’Higgins, y a quien el Senado mira como culpable
de este conflicto.

Era él quien había asegurado que con el 15 por ciento esta-
blecido sobre los frutos de esportación al Perú habría lo sufi-
ciente para socorrer a Concepción i él quien se había negado a
echar mano de los diezmos, del ramo de licores, de los empré-
titos i de varias otras medidas que se le sugirieron. Ningún
otro tenía la responsabilidad de las tristes ocurrencias que aho-
ra se lamentaban.

“Llame V. E., concluía la carta, a sus ministros, actual de ha-
cienda i el que dejó de serlo, hágaseles cargo por cada una de
estas líneas, que el Senado está seguro que no negarán hechos
tan públicos i documentados; i entonces resultará sin violencia
que húe una iguana todo el contesto de los oficios de 27 de Set-
tiembre i de 19 de Octubre, i que no hubo razón para las pro-
testas que en éstos se hacen ni menos para librar el juicio de la causa que se nos atribuye al tribunal público; que otro tanto importa el manifiesto con que se amaga al Senado.

Estas palabras severas del Senado demostraron claramente a O'Higgins que dicha corporación no abandonaría su actitud por temor a las amenazas; que éstas no encontraban entera mente inflexible; y que el único medio de obtener su acuerdo era el de apelar al patriotismo de que siempre había dado relevantes pruebas. Desentendiése, pues, del reproche que él as envolvían e plantó la cuestión, nó en el terreno de las agresiones personales en que se venía colocando, sino en el de las conveniencias del país.

En el fondo, no había materia para un conflicto de semejante naturaleza, e solo se concibe la formación de éste, porque existía un estado latente de antagonismo que acechaba cualquiera oportunidad para manifestarse. Se trataba de dos tendencias de gobierno enteramente contrapuestas, pues la una se dirigía a la creación de un sistema de formas representativas, mientras que la otra tendía al mantenimiento del régimen personal implantado en 1817, y de aquí que se diesen tales proporciones a desacuerdos que en el fondo carecían de razón de ser. Uno i otro poder, en efecto, confesaban i siguieron confesando en sus comunicaciones que su propósito era el de aumentar todos los derechos, para hacer frente a las dificultades de la situación. Sólo por un error de cálculo, que mutuamente se enrostraban, no habían llegado a resolver si el nuevo impuesto establecido sobre los azúcares importaba un aumento o una disminución de las entradas fiscales.

En este espíritu de respeto reciproco, ya que nó de cordialidad, reveló también hallarse imbuido el Senado. "No desea mas V. E. que el Senado, decía a O'Higgins, tener recursos. Ambas autoridades conocemos la necesidad y que no son mas soportables las contribuciones indirectas que las personales, que tanto afligen i exasperan a los pueblos."

No dejó, sin embargo, de aprovechar la oportunidad para pedir economías en los gastos. Solo disminuyéndolos, en cuanto sea posible, agregaba, podremos equilibrarlos con las entradas. Este debería ser el objeto principal del estudio de los admiais-
tradores de la hacienda pública; de otro modo no existía era- 
rio. «Al efecto, concluía, ha hecho el Senado a V. E. algunas 
iniciativas que le han parecido oportunas y convenientes, sobre 
que nada se ha resuelto ni observado y espera tengan su efecto 
para no vernos otra vez en los presentes apuros».

Volviendo como se ve, a ese plan de economías que los congre-
sos predicen siempre y que los gobiernos no practican nunca o 
casi nunca!

No solo con motivo de la apreciación del problema econó-
mico producíanse entonces desacuerdos tan serios. Surgieron 
también por la aplicación de ciertas leyes políticas. Fué el mas 
grave el que se provocó con ocasión de una querella entablada 
contra el Intendente de Santiago, por don Felipe Conti Ca-
ránza.

Había recibido este sujeto en plena audiencia, según esponia, 
injurias de hecho de parte del Intendente y querellándose por 
esto a la Cámara de Justicia. Llamado a justificarse el acusado, 
desconoció la competencia de dicho Tribunal, fundándose en 
disposiciones constitucionales que indudablemente lo favore-
cían. La cuestión fue entonces llevada al Senado por el mismo 
Director Supremo para que señalara la autoridad a quien corres-
pondería conocer de la acusación. El Senado declaró que, según 
la Constitución, los empleados debían durar en sus destinos solo 
tiempo de su buena comportación; que en consecuencia, no 
podía dejar de existir un tribunal que los juzgase y que en el 
caso actual esa autoridad o tribunal era la Junta Superior de 
Hacienda, compuesta por el presidente del Tribunal de Apela-
ciones, el Contador Mayor, el Ministro más antiguo del Tesoro 
i el Fiscal. Mandó, pues, pasar los antecedentes a dicha Junta 
para que se pronunciase en conformidad a las leyes.

Acató O'Higgins esta resolución i el Tribunal de Hacienda, 
a poco de estar conociendo de la querella y poseído de toda 
la gravedad de la misión que investía, dictó un decreto por el 
que suspendía de sus funciones al Intendente.

Profunda irritación causó esta providencia en el ánimo de 
O'Higgins, que veía comprometidos con ella el prestigio de los
funcionarios públicos y la estabilidad del mismo Gobierno. En aquel estado de transición entre el régimen antiguo derribado por el doble empeño de las ideas y de las armas y el régimen nuevo, que se sentía venir pero que aun no llegaba, existía una situación preñada de peligros, una situación frágil, inestable, incierta, que debía ser mantenida con el más esquisito cuidado. Cualquiera imprudencia podría traer al suelo este edificio recientemente levantado que reposaba sobre cimientos denasiados frescos para que fuesen muy sólidos. I qué mayor imprudencia que la de suspender de su destino a una de las más altas autoridades del país, a virtud del denuncio de un particular sobre un hecho que ni siquiera estaba bien comprobado! Adónde podíamos ir a parar aceptando teorías que ponían a los funcionarios públicos al nivel de cualquier ciudadano, que debilitaban el crédito de los unos en tanto cuanto ensanchaban el poder de los otros? No, semejantes procedimientos eran enteramente inaceptables y estaban calculados para herir de muerte el prestigio de las autoridades, introducir la anarquía en el gobierno, el caos en todas partes.

Con estas ideas, el Director Supremo acordó suspender el decreto mencionado y comunicó a la Junta la siguiente resolución:

"La Junta de Hacienda no ha sabido conciliar la rectitud de su juicio con la política tan necesaria en las circunstancias del día, y por manifiestarse mui justa, ha decretado la degradante suspensión de un magistrado superior, abriendo un ejemplo que sería de funestísima transcendencia a la tranquilidad y subordinación amagadas por la influencia de los pueblos vecinos, si el Gobierno no la atajase suspendiendo, como suspendo, el curso de esta causa, reservando su continuación para el tiempo de la residencia del gobernador-intendente, cuyo temperamento adopta como encargado por la Constitución provisoria de velar sobre la conservación del orden interior. Fase el proceso al Excmo. Senado con el oficio acordado trascribiéndose este decreto a la Junta de Hacienda, previniéndole que en lo sucesivo proceda con mejor tino en materias tan delicadas como la presente, y se abstenga de vestirse en el modo incitativo y poco respetuoso con que concluye su oficio de siete del corriente."
De esta dura reprimenda reclamaron los miembros de la Junta verbalmente y dieron por lo demás cuenta al Senado, que había recibido el oficio acordado de que se había en la misma.

Golpe el más impolítico e injurioso contra los magistrados superiores, llamaba O'Higgins en ese oficio, la medida adoptada por la Junta. Ella venía a infijir un verdadero castigo a un funcionario a quien no se le había probado ningún delito, con desmedro de la autoridad de todos ellos. En presencia de semejante medida, no había encontrado un medio más aparente para salvar esa autoridad que la de suspender el curso de la causa en que hubiera incidido. La salud del pueblo, agregaba, repitiendo cuanto han dicho los gobernantes en idénticas o parecidas situaciones, es la suprema leí, y él se veía en el caso de aplicar este axioma en su más riguroso sentido para impedir que los descontentos cobrasen bríos a fin de perturbar el orden.

Atendidas las consideraciones superiores que mediaban en este caso, habría debido procederse en otra forma. Urja que yertos semejantes no se cometiesen jamás y para esto convenía que se dictasen leyes especiales. O'Higgins terminaba su oficio pidiendo al Senado que acordase un reglamento sobre la manera cómo podría hacerse efectiva en los funcionarios públicos cualquiera clase de responsabilidad e esperando que resolviese, como siempre, "lo más conveniente a la salud pública."

Así, pues, el Director Supremo, que había asentido al juzgamiento del gobernador-intendente, pretendía paralizar el juicio, porque éste se encaminaba de tal modo que pesaba en peligro la permanencia del acusado en su puesto. Sin dejar de convenir en que existía un serio vacío en las leyes para casos semejantes y en que no carecía de razón O'Higgins para pedir al Senado que dictase un reglamento destinado a llenarlo, la verdad es que estos mismos sucesos dejan la impresión de que el Director Supremo se hallaba dispuesto a respetar la existencia e a tolerar el funcionamiento de los otros poderes solo en cuanto no se opusiesen a lo que él consideraba como exigencias de la salud pública. Por lo demás, con profundo disgusto se resignaba en ocasiones a entrar por un camino distinto al que discrecionalmente se trazaba.

La salud pública, el orden público formaban su eterna preo-
ocupación, y en este temor, que le ha sobrevivido por mucho tiempo, por demasiado tiempo, se inspiraron desde entonces las leyes políticas del país. Puede asegurarse que a la cabecera de O'Higgins, que tan eficaces elementos de poder tenía en sus manos, velaba incansablemente el espíritu de la desconfianza ahijando sus ensueños y perturbándolo en sus ideas de gobierno.

Para prevenir los peligros que se creaban en su fantasía de gobiernantes temerosos aun de las manifestaciones más inocentes del derecho, peligros ante los cuales revisten muy poca importancia los conatos más o menos descabellados de revolución de la época, se creyó indispensable adoptar un régimen que ahogara toda iniciativa de los ciudadanos y que fué como una red inextricable dentro de la cual quedaron prendidas todas sus garantías. Por huir de la anarquía, quería O'Higgins llegar a la dictadura constitucional y permanente. Este error funesto que lo derribó del poder, hizo desgraciadamente escuela en el país.

Nada es más contagioso que el miedo, y el Senado se encargó de probarlo dictando el reglamento que le pedia O'Higgins en una forma calculada para hacer imposible toda acusación contra los funcionarios públicos.

Sin embargo, por una inconsecuencia, hija del amor propio que ponía en defender sus fueros, acordó declarar que la Junta de Hacienda procediendo como procediera, había obrado en conformidad a la Constitución y a los senado-consejos dictados con posterioridad a ella. Si la parte acusada se había sentido agraviada, debió usar los recursos que las mismas leyes le franqueaban. Lo demás, decía, importaba trastornar el orden.

Pero el conflicto no podía ya existir, pues el Senado ordenaba que la querella se siguiese tramitando en conformidad al nuevo reglamento dictado al efecto, lo que era nada menos que desalojar anticipadamente al querellante.

No dejó de comprender este cuerpo que en el fondo de lo que aparecía como una cuestión personal, mas o menos grave, existía otra de principios que importaba resolver cuanto antes, y era la de fijar el tiempo que debían durar las funciones de los intendentes y gobernadores. Esta cuestión, relacionada con otras igualmente graves, fue la que trajo su ruptura completa con O'Higgins.
A la fecha en que se produjo el último conflicto a que aludíamos, el escaso personal del Senado se hallaba un tanto reducido. El primero de sus miembros que se había ausentado de la sala de sesiones, a las que, por lo demás, todos ellos habían concurrido siempre con patriótico entusiasmo, fué don Juan Agustín Alcalde. Negocios particulares indujeron a este distinguido patriota a presentar una renuncia de que se dio cuenta en sesión de 22 de Octubre de 1821.

Acto continuo resolvió el Senado manifestarle en el amplísimo lenguaje de su secretario, que «si por su decidido interés en favor de la libertad de América i por su patriotismo había admitido gustoso el cargo de Senador que le confiaron los pueblos de la nación, no era posible que antes del Congreso jeneral se le permitiera la separación de un cargo que había desempeñado con tanta dignidad, i que, si quitados los tropiezos de la anarquía, se esperaba por momentos la conclusión de nuestra lucha con los enemigos, se sirviera esperar ese corto tiempo continuando la mortificación que había tenido hasta el día por el abandono de sus intereses».

Nada replicó Alcalde; pero, pasados algunos días en los cuales se abstuvo de concurrir a las sesiones, volvió de nuevo a tomar parte en las pesadas tareas que se había impuesto con el mismo tesón que hubiera gastado desde un principio.

Una circunstancia distinta separó de aquella corporación a don José Ignacio Cienfuegos i a don José María de Rozas: el primero recibió nombramiento de Enviado Extraordinario i Ministro Plenipotenciario de Chile ante la Santa Sede i el segundo obtuvo permiso para trasladarse al Perú, por motivos particulares.

Desde un principio había preocupado seriamente la atención del Senado la situación anormal por que atravesaba el país en materias eclesiásticas, Roto el vínculo que lo unía a España, cuyos monarcas eran en cierto modo jefes de la iglesia en toda la extensión de su imperio por los amplios derechos del patronato que ejercían, o por lo menos, mediadores obligados del Sumo Pontífice para con los pueblos que ellos gobernaban, había quedado también disuelto todo lazo de unión con el jefe del catolicismo.
A esta primera causa de perturbación en el terreno de lo espiritual, agréguese la que producía la falta de un obispo con jurisdicción de tal en la capital de la nueva República, pues la persona que dicho carácter investía había sido obligado a abandonar la diócesis por razones políticas.

En un pueblo esencialmente católico como el nuestro en que las esferas de acción de la autoridad civil y de la eclesiástica tenían tantos puntos de contacto que casi se confundían, semejante situación no podía prolongarse indefinidamente. Protestaban contra ella las necesidades diarias de la administración y el sentimiento religioso de todo el mundo.

Para remediar las unas, habíanse arbitrado distintos procedimientos. Hemos visto que hasta el Senado se consideró en distintas ocasiones obligado a interpretar o aplicar los cánones. Pero ¿cómo satisfacer el segundo si no se nombraba un representante para pedir al Papa que ligase los eslabones de aquella cadena rota desde hacía varios años?

Convencido el Senado de que no debía aguardar más tiempo, tomó en sesión de 6 de Abril de 1821, el siguiente acuerdo:

"Que para establecer un régimen eclesiástico conforme con la disciplina de la iglesia y los derechos del Estado y para obtener la sanción de los reglamentos ya dictados, se nombre por el Supremo Director una persona que se traslade a Europa y se entienda, en nombre del Gobierno de Chile, con el Sumo Pontífice."

Asintiendo a esta determinación que sin duda se había adoptado con su acuerdo, O'Higgins nombró en el carácter de Enviado Extraordinario al distinguido sacerdote y hombre público ya mencionado. La separación de Cienfuegos, cuyas relaciones con el Director Supremo eran muy estrechas y cuya prudencia, versación en los negocios y antigua adhesión a la causa de la independencia, le habían asignado un lugar prominente en la sociedad chilena, privaba al Senado de un útil consejero en las dificultades que se preparaban.

El último acto político de Cienfuegos, antes de emprender su viaje al lugar de su destino, fué el haber escrito una carta a O'Higgins para pedirle con el más vivo lenguaje que rechazara de su espíritu la idea de traer un príncipe europeo a fin de po-
nerlo a la cabeza de los destinos del país, como lo deseaban algunas personas apasionadas por la monarquía.

"Por lo que a mí toca, decía en uno de sus párrafos, protesto a V. E. que como ciudadano de Chile y como senador, me niego a semejantes aspiraciones con las que deshonraría mi empleo y haría traición a la confianza que V. E. y los pueblos han hecho de mí."

Como se vio, ni aun al alejarse del país le abandonaba la dignidad e independencia con que había ejercido el cargo de senador. Por lo demás, dijeron a Cienfuegos estensas instrucciones sobre los propósitos que debía perseguir y los medios de que debería valerse para realizarlos.

Aun cuando, en un principio, habían sido tan solamente razones de carácter privado las que habían decidido a Rozas a pedir al Senado permiso para ausentarse, por su parte, del país, el Gobierno encontró medio de conferirse una delicada misión, de tal suerte que su viaje vino, como el de Cienfuegos, a ser realizado en servicio del país.

A mediados de 1821, el gobierno, cada día más urjido por las dificultades de la situación económica de que tan extensamente hemos hablado y que en vez de disminuir, iban en aumento, pensó que podría salir de ellas reclamando del Protector del Perú, general San Martín, las sumas que tanto el mismo gobierno como los particulares habían gastado para organizar la expedición libertadora.

Para llevar a efecto este pensamiento, pidió el acuerdo del Senado. La misión tendría desde luego por objeto felicitar a San Martín, al cabildo de Lima y al lord Cochrane por los triunfos obtenidos; en seguida, combinar con San Martín las medidas necesarias para fomentar las relaciones entre ambos países; por último, hacer conocer al gobierno de Lima la situación en que quedaba el de Chile.

"Manifestará a aquel gobierno, decía el artículo 4.0 de las instrucciones que formó el Senado, el estado de indigencia en que éste ha quedado por los gastos de la expedición libertadora, en circunstancias de verse precisado a sostener una guerra en las
Provincias Unidas, contra los anarquistas que intentaron trascender a Chile e invadir en su ruina a este estado, y otra en la provincia de Concepcion contra los últimos restos de la fiera repelidos en Arauco que la invadían diariamente, a fin de que se nos ausilié con algún dinero o frutos del país a cuenta de la deuda, que se reciban por derechos en la aduana los billetes del empréstito que debe pagar este gobierno.

Fue primero designado para llevar a cabo una misión tan difícil el ministro Rodríguez. Pero acaso porque la presencia de este era más necesaria en el país se comisionó en su lugar al senador Rozas, que iba al Perú por razón de negocios, como queda dicho, y a quien se prometió pagarle el tres por ciento de lo que consiguiera del gobierno peruano.

Rozas partió pocos días después de obtener el permiso solicitado y provisto de las respectivas credenciales. Desgraciadamente, su viaje, en cuanto tenía por objeto servir los intereses públicos, no produjo ningún resultado.

A las representaciones que hizo para obtener algún socorro, a cuenta de los gastos de la expedición libertadora, contestó San Martín, según informes del mismo Rozas, que el gobierno del Perú abonaría aquellos gastos cuando el de Chile practicara otro tanto con el de Buenos Aires, por los que erogó en la expedición que en 1817 libró este país.

La medida del gobierno había sido precipitada e inoportuna, pues la lucha de la independencia peruana apenas si daba comienzo; pero la respuesta de San Martín no podía ser más impolítica, y cuesta trabajo aceptarla como literalmente exacta.

Con la renuncia de Rozas y de Cienfuegos quedaba el Senado reducido a solo tres miembros. La renuncia de Alcalde, que según parece estaba pendiente, a pesar de que este senador asistía a las sesiones, amenazaba reducir aún más ese número.

De esta circunstancia quiso valerse el Director Supremo para realizar el propósito que alimentaba desde tiempo atrás: el de suprimir ese cuerpo que ponía constantemente trabas a su voluntad.

No provenía ciertamente de la Constitución provisional de 1818 la situación, evidentemente anómala, en que se hallaba el Senado. En alguno de sus artículos tenía establecido que ade-
mas de los cinco vocales propietarios, se elevarían en la misma forma, esto es, por el Director Supremo, cinco suplentes que, por el órden de sus nombramientos, se entenderían a ejercer el cargo de los propietarios, en caso de impedimento de éstos. Dando cumplimiento a esta disposición, había designado O'Higgins, como suplentes, a don Martín Calvo Encalada, don Javier Errázuriz, don Agustín Eyzaguirre, don Joaquín Gandarrillas y don Joaquín Larraín. Al primero y al último de los nombrados, había debido correspondérsles llenar las vacantes de Cienfuegos y de Rozas, respectivamente, y a Gandarrillas reemplazar a Alcalde.

¿Por qué el Senado no había seguido el camino que le estaba trazado por la Constitución? No podemos darnos una respuesta del todo satisfactoria, aun cuando tampoco debemos echar en olvido la circunstancia de que el último de los senadores nombrados asistía a las sesiones y la de que, en cuanto a Rozas, su licencia le había sido concedida con la condición de que no se llamaría al suplente, pues se guardaba su pronto regreso. De todos modos, es un hecho que las sesiones se celebraban con cierta irregularidad. En todo el mes de Enero de 1822 no hubo sino cinco; en el de Diciembre del año anterior, seis. Sentía, sin duda, aquella corporación esa laxitud que se apodera siempre de los cuerpos colegiados después de un largo período de tiempo de trabajo constante, especialmente cuando no se re- nueva el número de sus individuos, porque la entrada de otros miembros le infunde como una nueva sangre. Téngase todavía presente que no era sino natural que ocurriesen estas irregularidades dadas las condiciones de la estación que se alcanzaba.

No puede, pues, imputarse el descuido del Senado a un olvido del cumplimiento de sus deberes, sino a la confianza que le asistía de que su existencia, fundada en la Constitución y en las necesidades públicas, se hallaba al abrigo de cualquier peligro. Tranquilo en esta confianza, dejaba transcurrir el tiempo sin preocuparse de integrar el número de sus miembros.

Pero O'Higgins que acechaba la oportunidad de deshacerse de un poder que ponía constantemente límites a su autoridad, y que, en su entender, había burlado las esperanzas que en él hubiera confiado, O'Higgins, que por aquella época parecía estar
enteramente desengañado del sistema representativo de gobierno y no confiaba en la cordura de los pueblos, creyó que era llegado el momento de realizar su proyecto de clausurar el Senado y arrogarse toda la plenitud del poder.

Determinado a obrar en este sentido, no tardó en poner en práctica su resolución.

En la sesión de 5 de Febrero del año mencionado, se dio cuenta de un oficio reservado en que el Director, tomando como protesto la renuncia de algunos senadores y la ausencia de otros, proponía que la corporación suspendiese sus sesiones delegase en él todas las facultades de que se hallaba investido. No quedaba constancia de la impresión que esta nota hiciera en el ánimo de los tres senadores que tomaron conocimiento de ella, pero cabe suponer que, dado el desacuerdo en que se habían encontrado de ordinario con O'Higgins, comprendieran de sobra los móviles a que obedecía. La respuesta quedó acordada inmediatamente, y fué lo que no podía menos de ser: el Senado no aceptaba este suicidio.

Esta respuesta, en que aparece retratado el Senado con la dignidad que puso siempre en el desempeño de sus deberes y particularmente en sus relaciones con el Gobierno, junto con desvanecer las razones en que éste fundaba su pretensión, deja establecida toda la significación que le atribuía.

Después de manifestar que la situación anómala por que atravesaba era simplemente accidental, pues los senadores en ejercicio estaban facultados para llamar a los suplentes e integrar de este modo la corporación, espusieron a O'Higgins que el arbitrio por él propuesto era enteramente inaceptable. El Senado no se consideraba facultado para suspender sus sesiones y menos para dar al Director Supremo la plenitud del poder cuando no lo requerían las circunstancias. «Esto sería, usamos sus propias palabras, atacar directamente la Constitución, destruir todas las trabas que se habían establecido e dejar al Ejecutivo sin los límites que le fija un título entero de la misma. Entonces, decía, nos haríamos justamente responsables a los pueblos que nos dieron las atribuciones anexas a nuestros destinos.»

En seguida, con una conciencia exacta del papel que le in-
cumbia, agrega: "Es preciso que exista i se conserve el Senado para que exista i se conserve la Constitución; para que haya equilibrio entre las autoridades; para que se conserve el orden y para satisfacción de los pueblos y seguridad de los ciudadanos. Todo esto se ha confiado al Senado i no puede ser que éste se separe ni aun por poco tiempo, dejando a S. E. la plenitud de facultades, aunque tenga como tiene la mayor satisfacción de la conducta, amor público, desinterés i demás buenas cualidades de V. E."

Las últimas palabras de esta nota se dirigen a manifestar que, suprimido el Senado, se haría indispensable convocar a un Congreso.

Si se hubieran hechas innecesarias sus sesiones por haber concluido la guerra y hallarse tranquilizado el país, se imponía el deber de llamar al pueblo a elecciones.

Era justamente lo que no quería O'Higgins. Así, indicándole que a esta consecuencia debía arrastrarlo lógicamente la supresión del Senado, esaba este cuerpo del argumento que más efecto podía hacer en su ánimo.

A la enérgica, elevada i noble respuesta que hemos resumido, nada replicó el Director Supremo. Indudablemente, había equivocado el camino. No conseguiría que se suicidase la corporación que había nacido por un acto de su voluntad, pero que existía por una necesidad del organismo polítiico del país, como un ejemplo vivo de que, sobre los propósitos de los gobernantes, prevalece la inflexible ley del desarrollo histórico de aquéllos.

A reconocer que el movimiento natural de ideas producido por la emancipación del dominio español hubiese creado nuevas necesidades políticas, negábase, en efecto, O'Higgins. Mediaba el año 21, i el Director Supremo, elegido en 1817, permanecía fiel a los propósitos de gobierno que hubiera incumbido desde entonces. Aspiraba a la libertad de sus conciudadanos, pero no abrigaba ninguna confianza en su cordura para dirigirse a sí mismos. Como en los días difíciles de la guerra, en que era indispensable una autoridad fuerte i con nadie compartida.
para organizar los elementos que debían dar al país la victoria final, quería ahora mantenerse en el gobierno, sin atribuir al pueblo ninguna participación en la cosa pública.

A su juicio, no iba a existir quietud, órden si paz desde el día en que éste entrase a ejercitar sus derechos soberanos. Sin mayor ilustración que las otras repúblicas sud-americanas, recientemente emancipadas también, Chile sería, como ellas, presa de las facciones. Ofrecería un espectáculo análogo al que presentaban las provincias del Río de la Plata, en que parecía cebarse el jenio de la discordia.

La libertad era un fruto que estas sociedades, educadas en una escuela de estrecho autoritarismo, no debían sino saborear con mesura, casi con desconfianza. Así se explica que en la carta a San Martín que hemos citado, no tuviera sino palabras de condenación para el sistema representativo. Ocultábase en este sistema un veneno que fácilmente podía disolver aquellos nuevos organismos.

No pensaba del mismo modo el pueblo. Con la inusitación de sus brillantes destinos había aceptado la revolución que no comprendiera bien en principio. Mas, como quiera que en el curso de la guerra se hubiere acostumbrado a deliberar sobre negocios públicos, a intervenir en la formación de los gobiernos, a reunirse en comicios más o menos imperfectos, cuando sonó la hora de su emancipación aprobó con repugnancia el mantenimiento del gobierno encabezado por O'Higgins. Creía tener derecho a hallarse en aptitudes para gobernarse a sí mismo. Al ver que transcurria el tiempo sin que se realizasen las promesas que se le habían hecho, esto es, de darle instituciones representativas, un zordo descontento fermentó en él, y sus personalidades más culminantes comenzaron a decir que aquel régimen en que vivían se parecía a un despotismo.

El nombre del Director Supremo no fue pronunciado ya con respeto, y al caído que antes hubiera rodeado la persona de éste, sucedió poco a poco ese sentimiento de desconfianza y de frivaldad que suscitaban siempre los malos gobemantes.

Sin embargo, es la época que alcanzamos, O'Higgins no había perdido su popularidad, aun cuando estuviese en camino de perderla. Fué su obstinada resistencia a variar el rumbo que
había impreso a su política, lo que hizo aborrecible su nombre a todos los partidos y concluyó por aislarlo enteramente.

De esta resistencia tenaz e sistemática da una prueba evidente el conflicto en que se vio empeñado con el Senado a propósito de la necesidad de convocar al pueblo a elecciones, conflicto que fue el más poniendo y el último de todos ellos.

Desde sus primeras sesiones había preocupado al Senado esta cuestión.

En efecto, en la de 9 de Diciembre de 1818, acordó, en cumplimiento de disposiciones constitucionales e satisfaciendo los más generales deseos, proceder a formar el reglamento que se habría de observar en la elección de tenientes-gobernadores y de cabildos. Mientras se aprobaba este proyecto, mandó suspender la de los alcaldes intentando que continuasen funcionando los que existían a la sazón.

No bien hubo adoptado semejante acuerdo, cuando la falta de estabilidad gubernativa, los temores de revueltas que dominaban en muchos espíritus y hasta la misma guerra con los españoles que se prolongaba en el sur, lo obligaron a diferir por algún tiempo su ejecución. Así lo decía en nota enviada al Director Supremo, en que le daba cuenta de una consulta elevada por el Cabildo de Santiago, sobre la manera de proceder en las nuevas elecciones.

Las consideraciones anteriores indujeron al Senado a ordenar que los cabildos procediesen a efectuar sus elecciones del mismo modo que antes las habían efectuado; pero a fin de que los nuevamente electos fuesen instruidos de los asuntos pendientes, dispuso que continuasen en sus funciones seis de los miembros del Cabildo pretérito. Componían este número aquellos individuos que, por el cargo que ejercían, conocían más de cerca los diversos ramos de la administración. El acta de la elección debía ser comunicada al Director Supremo para que la aprobase. Se hacia a los electores la advertencia de que debían fijarse en candidatos que reuniesen competencia, patriotismo e aversion a todo espíritu de partidarismo.

En lo que se refiere a la elección de gobernadores y tenientes-
gobiernadores, volvió también el Senado sobre sus pasos. Apé-
nas una semana después de adoptado el acuerdo trascrito, resolvió suspender, en conformidad a lo propuesto por el Director Supremo, la elección de aquellos empleados e encargar al mismo funcionario que, para consuelo de los pueblos, renu-
viese a los que hubieran abusado o delinquido, e nombrase en su lugar vecinos pudientes e patriotas.

Por aquella época, i como hemos dicho en otro lugar, hacíanse notar ciertos síntomas de descontento que, sobre todo, tráían preocupado a O'Higgins, responsable del orden público, en su carácter de Jefe del Ejecutivo. Los partidarios de Carrera, que no se daban por definitivamente vencidos, formaban una atmós-
fera pesada alrededor del Gobierno. Constantemente se hablaba de intentonas de motín; no pocas veces, de conjuraciones en-
caminadas a asesinar al mismo Director Supremo.

Qué parte tuviera, en estas relaciones que andaban de boca en boca, la fantasía de los amigos, propensas en semejantes casos a acrecer desmesuradamente los peligros; o qué hubiera de exacto en ellas, no es ahora fácil saberlo. Pero, el gobierno sentía que el terreno vacilaba a sus pies, y los espíritus más perpicaces o más timoratos creían divisar por todas partes siniestras se-
fíales.

Dominado por estos temores, el Senado no tuvo inconve-
niente en ir propiciando la fecha en que debían verificarse las elecciones. En lo que se refiere a los pueblos, solo con resisten-
cia aceptaban estas prórrogas, que los condenaban en muchos casos a soportar mandatarios odiados, i que los privaban, por un tiempo indefinido, de derechos que reputaban definitiva-
mente establecidos.

En el número de los pueblos descontentos figuraban los de San Fernando, Rancagua, Quillota i los Andes, todos los cuales habían entablado los correspondientes recursos en contra de sus gobernadores.

Es cosa curiosa que entre los medios que reputaba eficaces el Senado para que los pueblos fuesen bien gobernados, figure el de que la elección de sus mandatarios recayese en sujetos pudientes. Consideraba que si estos mandatarios poseían bi-
nes suficientes para sostenerse sin el auxilio del gobierno no era
de presumir que cometiesen ninguna clase de abusos. Su fortuna constituía una garantía de buena comportación.

De acuerdo con estas ideas, resolvió que para acallar los clamores de algunos pueblos se declarase que todavía no se encontraba Chile en estado de proceder a la elección de sus gobernantes, porque aún quedaban algunos facciosos que perturbaban el orden y se hacía menester estirparlos antes de ocurrir a ellas. Mientras tanto, debería colocarse a su frente a ciudadanos honrados y virtuosos que contasen con medios de subsistencia. En esta forma convendría proceder cuanto antes en las provincias que se hallaban quejosas de sus gobernadores.

No consiguió el Senado desprenderse, como lo quería, de estas preocupaciones.

Con motivo de una nueva consulta del Cabildo de Santiago sobre la manera de proceder en la próxima elección de sus miembros, mandó que siete de éstos, que desempeñaban distintos empleos, continuasen en sus funciones y se incorporasen al nuevo Cabildo. Solo debería procederse a la elección de los restantes.

Este acuerdo fue vetado por O'Higgins, quien no aceptó que aquel número excediera de seis como había sido ordenado anteriormente. Se opuso también a que se pudiera reelejir a los capitanes salientes. «Lo primero, decía, embarazaría el ingreso al cabildo de un individuo que podría servir útilmente, y a cuya distinción tienen un derecho todos los ciudadanos que pueden ser llamados en las elecciones; y lo segundo, sobre traer los mismos inconvenientes, sería un aliciente para que otros aspirasen a perpetuarse en un destino, especialmente siendo rentado.»

Otro incidente, de mayor importancia, solicitó a principios de 1820, la atención de aquel cuerpo. Fué nada menos que un reclamo del fiscal de Petorca para que se declarasen nulas las elecciones del Cabildo de esta villa, por abusos cometidos en ellas.

Es éste uno de los primeros casos de escándalos electorales que se encuentra en la historia de aquella época; pero, no por cierto, el primero, pues en la elección del Congreso Nacional de 1811 habíanse cometido diversos abusos.
Para concretarnos al caso en cuestión, conviene dejar establecido, sin embargo, que no fué el gobierno quien profanó dichas elecciones, tomando en ella una injerencia indebida. Sea dicho en su honor, O'Higgins hasta entonces se había desinteresado completamente en esta clase de actos, comprendiendo que debía dejar a los ciudadanos en absoluta libertad para designar a sus mandatarios. Los escándalos, que existieron de un principio, provinieron de los ciudadanos mismos, o más exactamente, de los partidos, que sin tener una conciencia bien formada sobre el respeto que debe atribuirse al derecho de sufragio, anteponían el triunfo a toda consideración de moralidad y de honradez. A trueque de obtener ese triunfo no vacilaban en desviarse de los procedimientos legales.

Así procedió una de las facciones en que se hallaba dividido el cabildo de l'etorca.

Desgraciadamente para ella, el fiscal pidió la nulidad de las elecciones y el Gobierno y el Senado se apresuraron a decretarla.

El último resolvió además autorizar al Director para que elijese los miembros de los cabildos, en casos de nulidad. En definitiva, fué el Gobierno quien vino a reportar provecho de los abusos cometidos por los particulares, en el ejercicio de sus derechos electorales.

El celo excesivo, a veces criminal, que gastaban las facciones en servir sus intereses de bandera, fué también causa de que el gobernador de San Fernando se creyese con derecho para tomar parte en los trabajos de la elección que se preparaba en el departamento para el 1º de Enero de 1821.

No obstante de haber sido expresamente prohibido por el Senado que se circularan listas de suscripciones (como se las llamaba) a fin de que no se formaran partidos i coetradiciones entre las familias, algunos vecinos pusieronse a recojer firmas en servicio de ciertas candidaturas. Valióse de este pretexto el teniente-gobernador para llamar la atención del Senado sobre la doble circunstancia de que cierto partido de la localidad se había adhesado a todos los empleos municipales, i de que, para prevenir los males que flúan de tal estado de cosas, se hacía indispensable que el nuevo cabildo fuese compuesto de algu-
nas de las personas que figuraban en una lista firmada por él mismo. Cayó el Senado en la red, y sin pensar en todo lo que había de irregular en su procedimiento, aceptó que O'Higgins dirijese al referido gobernador ciertas instrucciones que en el fondo y en la forma lo autorizaban para intervenir en las elecciones. Esta pieza merece ser reproducida íntegramente porque en ella aparece el jérmén de esta grave dolencia de la intervención, incorporada desde entonces en el organismo nacional.

Dice así:

"S. E. el Supremo Director se halla instruido de que el espíritu de facción está empeñado en dar toda su influencia a las elecciones del cabildo de San Fernando que deben hacerse en 1.º de Enero del año próximo venidero.

"Nada sería más sensible a S. E. que el ver que prevaleciese la hirida de la discordia en tal acto, y la necesidad en que se vería de atajar sus consecuencias por medios fuertes.

"Mas, como el pueblo de San Fernando le ha dado hasta aquí las mejores pruebas de sus virtudes cívicas, espera que en dichas elecciones las pondrá en ejercicio, teniendo presente cuánto importa aumentar el concepto que se merece Chile ante las naciones, sobre los demás pueblos de América, el que no se interrumpa la tranquilidad de San Fernando por razón de las elecciones.

"En este concepto, encarga a V. E. eficazmente, como a su representante, empeña su celo en hacer que las elecciones recaigan precisamente en sujetos patriotas, libres de todo facción, especialmente de la ominosa que tantos males ha causado a la República, (la de los Carreras), a las provincias del Río de la Plata y un notable atraso a la marcha de la libertad en el resto de esta América, y que al mismo tiempo, sean amantes del orden, de la justicia y de la común prosperidad. Observadas estas reglas, las elecciones serán, sin duda, satisfactorias a todo buen ciudadano S. E. tendrá el placer de confirmarlas, sin necesidad de usar de la facultad de crear un Cabildo, como lo haría con violencia si el suceso no correspondiese a sus esperanzas."

Era esta una carta blanca que se daba al gobernador; y tal uso debió hacer de ella, que las referidas elecciones no fueron
anuladas. Sin duda que dieron por resultado el triunfo de candidatos vestidos de las cualidades que indicaba el gobierno, es decir, de los candidatos de sus afecciones. De otro modo, el Director Supremo, llevando a efecto la amenaza que tenía el buen cuidado de recordar, habría procedido por sí a hacer el nombramiento.

Notemos que existía una idea tan incompleta de lo que constituía la vida política en los pueblos sujetos al sistema representativo, que se miraba como un mal gravísimo el que los electores tomasen empeño por el triunfo de sus candidatos. Se habría querido que no hubiese habido lucha, esto es, que hubiese continuado aquel estado de letargo político que había durado por largos siglos. Con la intención de precaver sus esperanzas, primero dio el Gobierno consejos a los partidos; en seguida, se lo dió para que procedieran con acierto en la elección de sus mandatarios. Pero un superior que da consejos, no está lejos de impartir órdenes; un gobierno que se cree con derecho a dar lecciones a los pueblos se halla muy próximo a tomar las medidas del caso para hacerse obedecer. Así parece haber sucedido entre nosotros. Por una pendiente rápida fuése deslizando la intervención de los gobiernos, y de puramente oficiosa i directiva, como lo fuera en un principio, pasó a ser más tarde en un todo arbitraria i exigente.

Esta intervención, que luego habría de alcanzar formas aún más francesas, pues O’Higgins debió sentirse alentado por el fruto que recogiera en los casos recordados, empezó a desarrollarse en una época en que los intendentes y gobernadores carecían, casi por lo general, de sueldo.

Convendrá recordar, a este respecto, que los gobernadores-intendentes tuvieron sueldo desde 1818 para adelante, esto es, desde la época en que la República se declaró solemnemente emancipada del dominio español.

El intendente de Coquimbo recibía una asignación de dos mil cuatrocientos pesos anuales, i además, la suma de cuatrocientos pesos para habitation, que se le darian miétras aquella ciudad no tuviese un palacio correspondiente a su gobernador.

La misma renta se asignaba al intendente de Santiago, don José María de Guzmán, a virtud de un decreto gubernativo de
22 de Mayo de 1813. En cuanto al de Concepción, que lo era el coronel Freire, recibía el sueldo de su grado.

A diferencia de los intendentes, los gobernadores no tuvieron rentas, con excepción del de Valdivia, a quien en 1820 se asignó un sueldo igual al de que gozaban los intendentes de Coquimbo y Santiago, y del de Valparaíso, a quien se fijó una cantidad muy módica para gastos de representación.

La intervención empezó, pues, a juzgar en una época en que, relativamente, los gobiernos no tenían sobre las autoridades de provincia medios extraordinarios de apremio que ejercitar.

Hasta aquí, Gobierno y Senado habían estado de acuerdo en considerar que, en razón de no hallarse definitivamente consolidado el orden público, convenía diferir las elecciones para épocas más felices.

Esta situación cambió desde fines de 1821.

Libre el país de enemigos extranjeros, había ido poco a poco, aunque con grandes dificultades, encaminándose en el sendero de la ley, del orden y del progreso. Y de un modo tan completo había quedado asentada la paz interna y destruidas las facciones que Chile empezaba a formar, contrastando con las demás repúblicas hermanas, envueltas en dolorosas guerras civiles.

Con estos antecedentes, consideró el Senado que había llegado la época en que debía iniciar a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos políticos. Al efecto, empezó por declarar en Setiembre de aquel año que, en conformidad a la Constitución, las funciones de gobernador-intendente y de teniente-gobernador debían durar solo tres años. Al fin de este trienio, los titulares cesarían en ellas e quedarían sometidos a un juicio de residencia. Dispuso además que, mientras se dictaba un reglamento de elecciones populares, cada cabildo propusiera al Supremo Director una terna de ciudadanos chilenos, domiciliados en el lugar y dotados de todos los requisitos legales, para que dicho magistrado elijese entre ellos el respectivo intendente o gobernador.

Adoptóse este acuerdo en los momentos en que el Senado se hallaba ocupado en la querella criminal entablada por don
Felipe Contí Carranza en contra del intendente de Santiago, y como un medio de prevenir los abusos que estos funcionarios podían cometer si tenían delante de sí un período indefinido de tiempo para permanecer en sus funciones.

Al dar a los cabildos una atribución que revestía tamaña importancia, como era la de proponer la temática de la cual debía salir el gobernador, se basaba en que a su juicio ellos eran los padres de los pueblos. Nadie, pensaba con mucha justicia, pedía tener más interés en ser bien gobernado que aquellos mismos que deben cosechar, por decir lo así, el fruto de la inteligencia o de la torpeza con que procedan. Se inclinaba de este modo el Senado a colocar en manos del pueblo el manejo directo de sus intereses.

Seis meses habían transcurrido desde que este acuerdo le fuera comunicado, y O'Higgins, celoso siempre de su autoridad y tanto como de ella, del mantenimiento del orden, no procedía a su publicación. En presencia de esta conducta, que tendía a dejar sin efecto sus propósitos, resolvió el Senado instarlo para que ordenara su promulgación. Al mismo tiempo, dispuso que se hiciera ver al Director Supremo que si felizmente el país se encontraba libre de enemigos interiores e exteriores, debía dejarse gustar a los pueblos el dulce fruto de la libertad. Al efecto, le pedía que, en conformidad a la Constitución, diera las órdenes del caso para que se procediese, así en la capital como en todas las otras ciudades, a efectuar la elección de gobernadores. «Espera el Senado, concluía su nota, que V. E. convenga en la presente resolución, de que resultará la mayor unión y tranquilidad de sus pueblos, es que consiste la opinión y felicidad de los estados».

Objeto O'Higgins este acuerdo pocos días después y el Senado resolvió inmediatamente insistir en él, por las mismas razones que se han hecho presentes. Como O'Higgins observará que las elecciones podían fomentar el descontento y dar alas a las pasiones, el Senado consideró conveniente recordarle que «el número de éstos era muy corto y no podrían introducir en el país la anarquía que otros experimentaban».

Menudeaban entonces los desacuerdos entre ambos poderes. La armonía, sostenida con tan serias dificultades en los años
anteriores, parecía estar a punto de romperse. En una misma sesión, la de 13 de Abril de 1822, se dio cuenta de que O'Higgins había mandado suspender un acuerdo del Senado que ordenaba suprimir la aduana de Valparaíso y de que, por segunda vez, insistía en la inconveniencia de proceder a la elección de los gobernadores. Pero el Senado estaba resuelto a todo y creía, sin duda, llegada la época de liquidar una situación que se había mantenido gracias a sus esfuerzos, pero con detrimento de los derechos más fundamentales de los ciudadanos.

En presencia de la nueva negativa de O'Higgins, resolvería insistir por tercera vez en que se mandase practicar las elecciones; y observarle que su último oficio sobre este mismo asunto no había sido reñido por ningún Ministro, y que en adelante debía abstenerse de enviar comunicación alguna que no llevara la firma del respectivo secretario de Estado.

No existen, desgraciadamente, las comunicaciones de O'Higgins, de tal modo que solo por inducción podemos decir que ellas fueron concebidas en un tono que no carecía de cierta acritud, que al contrario estaba calculado para dar a la discusión un jiro apasionado e personal.

En efecto, en su nota de respuesta, asegura el Senado que prescinde de contestaciones que puedan agríar los ánimos a propósito se contraria a examinar lo que sea útil e conveniente al bien público. Con este espíritu, único que dirija los trabajos de la corporación, se había acordado manifestarle que si el país se hallaba libre de toda clase de enemigos, no podía retardarse por más tiempo la hora de su reconstrucción, por medio de las elecciones. Ni era fundamentoísimo el de que existiesen algunos facciosos. En ningún país faltaban. «Es un imposible político que los que mandan y administran justicia dejen de tener émulos e inquilinillos.» Como quiera que fuese, un gobierno no podía fundarse en semejante motivo para privar al pueblo de los derechos que le competen. Si esos émulos e inquilinillos llegaban a perturbar el orden e quebrantar la Constitución, deberían ser perseguidos e castigados como enemigos interiores. Por lo demás, era un problema el de saber si las elecciones fomentarían la anarquía, o, al contrario, concluirían con ella.
O'Higgins aseguraba la existencia de la anarquía en todo tiempo; luego, no existía por culpa de las elecciones, desde que el país había estado privado de ellas. I acaso en la circunstancia de que no se hubiesen efectuado se hallaba precisamente la causa del descontento. Parecía probable que concedido este «privilegio legal, queden los pueblos mas subordinados, i este acto de jenerosidad i liberalismo funde i radique la opinion i fuerza moral del gobierno supremo.»

Resumiendo estas observaciones, agregaba: «Lo primero (la falta de elecciones) se ha practicado por cinco años, i el descontento i division existen; con que lo segundo, porque los pueblos claman, debe tocarte, i acaso sea éste el remedio a que V. E. aspira no menos que el Senado, i por que ambas autoridades sacrificariamos gustosos nuestra existencia; de modo que en esta parte ambas autoridades miran ese mismo objeto, pero desgraciadamente discordamos en los medios, cuando V. E. cree fomentar la anarquía por dichas elecciones i el Senado las mira como medio para distraerlas.»

Esta sincera i valiente manifestacion de sus opiniones, decidió sin duda de la suerte del Senado. O'Higgins comprendia la dificultad de mantener la discusion en este terreno, en que se sentia débil, i en que la corporacion antagonista se hallaba fuertemente apoyada por la opinion pública. Comprendia que el sistema de autoridad, fundado cinco años antes, no podia ya sostenerse. La evolucion que se habia operado en las ideas de sus concludandos no quedaba en secreto para el. Se dejaba ver en la prensa, escuchar en los corrillos politicos, observar en todas partes. Urja anticiparse a la catástrofe que se anunciaba por mil señales diversas.

Pero, entre tanto, debia de concluir con el Senado. Esta corporacion mandata se presentaba a su vista como un fiscal implacable, i ella iba a vijilar los procedimientos electorales i continuar tomando en el gobierno esa injerencia que habia tomado desde un principio, i que apenas O'Higgins hubiera podido soportar.

Como respuesta a la nota del Senado que queda resumida, no viro, en efecto, otra que una convocatoria del gobierno a elecciones, que importaba la disolucion de aquel cuerpo.
Dando valor a las mismas consideraciones que poco antes hubiera desestimado, el Director Supremo anunciaba que había llegado la hora de que la nación procediese a constituirse de un modo definitivo. Consideraba que, para este efecto, debía empezarse por elevar una convención que dictase una nueva carta fundamental.

"El Senado, decía, a mas de que fué desde el principio tan poco numeroso i que se instaló en tiempo en que no estaba libre toda la provincia de Concepción i los territorios de Valdivia, Osorno i Chiloé, no puede ya continuar ni aun las provisorias funciones de la legislatura por la ausencia i renuncias de la mayor parte de los individuos que lo componían, de manera que hoy legalmente no existe."

De tal modo se hallaba enemistado O'Higgins con aquella corporación que ni siquiera le dió noticia oficial del paso que había dado. A pesar de este desaire tan gratuito como inmerecido, los tres senadores que en la última época habían soportado todo el peso de trabajo, esto es, Alcalde, Pérez i Postecilla, se reunieron por la postrema vez i acordaron pedir explicaciones a O'Higgins sobre si la convocatoria ponía o no término a su existencia. Fundaban sus dudas en que el considerando del decreto respectivo sobre ausencia o renuncia de algunos senadores no podía aceptarse sin reservas. En efecto, era en primer lugar, un hecho que las renuncias de los unos no habían sido admitidas i que a pesar de todas renuncias, habían concurrido a las sesiones.

Se sabía también que el Senado se ocupaba entonces en integrar el número de sus miembros, para lo cual estudiaba las reglas que conviniese adoptar. Por último, jamás podía llegar el caso de que careciese de vocales, pues la Constitución tenía fijada la manera de reemplazar a los que faltasen.

Fué dicha nota el último acto político del Senado. Para O'Higgins este cuerpo había dejado de existir. Lo había condenado a muerte, i con un muerto no se cultivan relaciones.

Así, después de cuatro años de activa labor, en que había contribuido eficazmente a la realización del gran propósito de aquella época, la expedición libertadora al Perú, i a los primeros trabajos de la reconstitución del país, desaparecía de la
escena pública, mas por haber defendido valientemente los derechos del pueblo que porque fuera un obstáculo a la marcha de la administración. Sucumbía porque no había tenido con el poder las complacencias que éste reclamaba.

Después de su desaparición pudo creer O’Higgins que se había librado de un rival peligroso. En realidad, no consiguió sino quedarse frente del pueblo, que, adversario mucho más temible, no tendría con él consideraciones distintas a las que el mismo había tenido con el Senado.

Dentro de la esfera que le estaba señalada por la Constitución, este cuerpo había hecho cuanto le hubiera sido posible para levantar al país de la postración en que lo dejara la guerra, e dotarlo, al mismo tiempo, de instituciones adecuadas a las necesidades de la época. Carecía de los poderosos medios de acción que poseen los congresos para influir en la conducta de los gobiernos e impulsar el desarrollo de los pueblos. No investía un carácter representativo. No era una asamblea política. Sin raíces en el corazón de las masas, sus anhelos y sus deseos carecían de resonancia. Las discusiones suscitadas entre los cinco miembros que lo componían no tenían eco en el país. Nacían y morían en el estrecho recinto en que celebraba sus sesiones y al que la multitud no entraba. Sobre esos detalles, la opinión no ejercía ninguna influencia. El alma del pueblo, que comunica su gran fuerza a las asambleas deliberantes, estaba eternamente ausente de ellos. Así O’Higgins pudo en ocasiones prescindir de su opinión; sabía que el Senado no contaba con ningún apoyo, y cuando creyó que su existencia era un estorbo, pudo deshacerse de él, sin que se provocaran en el país protestas de ninguna clase. El Senado murió en silencio, como había vivido.

**Alcibiades Roldan**